



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia

Cristóbal Arias Solís, Senador de la República a la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el derecho de iniciativa consagrado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 8, numeral 1, fracción I; y 164, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, me permito presentar ante esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la **Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de su derecho de acceso a la justicia**, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se ha reconocido en la esfera internacional: si bien el acceso a la justicia es fundamental para el goce y la realización de todos los derechos humanos, **existen muchos obstáculos que impiden a las personas con discapacidad acceder a la justicia en igualdad de condiciones con las demás.**

Entre estos obstáculos figuran las **restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica**; las dificultades de accesibilidad física a las instalaciones de administración de justicia, como los tribunales y las comisarías de policía; la falta de transporte accesible hacia y desde estas instalaciones; los obstáculos para acceder a la asistencia y representación jurídicas; la no disponibilidad de información en formatos accesibles; las actitudes paternalistas o negativas que cuestionan la capacidad de las personas con discapacidad para participar en todas las fases de la administración de justicia; y la falta de formación de los profesionales que trabajan en la esfera de la justicia.

Aunado a que, en el sistema de justicia a menudo se considera que las personas con discapacidad no son dignas o no pueden beneficiarse de las garantías procesales que se ofrecen a todos los demás ciudadanos, o incluso que éstas pueden resultarles perjudiciales.

En el ámbito nacional, se ha vislumbrado que en el caso del acceso a la justicia las personas con discapacidad han enfrentado situaciones concretas de **desventaja histórica y exclusión sistemática** debido a diversos factores a saber: • La falta de conocimiento en el ámbito judicial sobre el tema de la



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia

discapacidad y, por consiguiente, la poca o nula sensibilización y toma de conciencia respecto a quienes tienen dicha condición de vida.

- La ausencia o escaso reconocimiento de las personas con discapacidad como titulares de derechos.
- La falta de accesibilidad en la infraestructura física y en el entorno de las comunicaciones y de la información de los sistemas de justicia, y
- La ausencia de aplicación de los instrumentos internacionales de la materia en los procesos judiciales en los que intervienen personas con discapacidad.

En cuanto al número de personas que viven con discapacidad en el país, se destaca que el Censo de Población y Vivienda 2020, 6,179,890 de personas viven con algún tipo de discapacidad; 13,934,448 de personas, con alguna limitación física o funcional, lo que representa 16.5 % de la población del país. Dichas cifras, **representa 4.9 % de la población total del país.** De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres.

Por tal motivo el presente proyecto de decreto de reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como objeto fortalecer el ejercicio de su derecho de acceso igual y equitativo a la justicia, sin discriminación, bajo la premisa de que el Estado mexicano debe garantizar la igualdad de acceso a este derecho fundamental a la justicia, proporcionando el apoyo y los **ajustes sustantivos, de procedimiento y adecuados a la edad, el género o el origen étnico,** que sean necesarios.

Lo anterior, con base en los razonamientos siguientes:

- A) Bien se sabe, que el derecho de acceso a la justicia de toda persona se encuentra reconocido en el ámbito internacional en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.

En el caso de las personas con discapacidad, su derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en el **artículo 13 de la** Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).



**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia**

Hay que decir, que México fue el principal promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, mismos que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Nuestro país firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó su adhesión el 17 de diciembre de ese mismo año.

EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

El derecho de acceso a la justicia tiene una doble noción, pues a la vez que se constituye como un derecho autónomo, es un medio para la realización y concreción de todos los demás derechos.

Tal como lo dispone el **artículo 13 de la Convención** referida, existe la obligación para las autoridades judiciales de asegurar un acceso a la justicia, lo que implica que se lleven a cabo todas las medidas necesarias para que la persona con discapacidad pueda ejercer ese derecho en igualdad de condiciones que el resto de la población, debiendo para ello realizar, incluso (atendiendo la terminología de la CDPD), **los ajustes al procedimiento** que se requieran, y que sean adecuados a la edad.

Para sustentar este proyecto de reforma legales, también hay que considerar que respecto a este derecho fundamental, en **agosto de 2020 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad**, emitieron un conjunto de Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, a saber:

Principio 1. Todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica y, por lo tanto, a nadie se le negará el acceso a la justicia por motivos de discapacidad.

Principio 2. Las instalaciones y servicios deben tener accesibilidad universal para garantizar la igualdad de acceso a la justicia sin discriminación de las personas con discapacidad.

Principio 3. Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, tienen derecho a ajustes de procedimiento adecuados.



**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia**

Principio 4. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información y las notificaciones legales en el momento oportuno y de manera accesible en igualdad de condiciones con las demás.

Principio 5. Las personas con discapacidad tienen derecho a todas las salvaguardias sustantivas y de procedimiento reconocidas en el derecho internacional en igualdad de condiciones con las demás y los Estados deben realizar los ajustes necesarios para garantizar el debido proceso.

Principio 6. Las personas con discapacidad tienen derecho a asistencia jurídica gratuita o a un precio asequible.

Principio 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la administración de justicia en igualdad de condiciones con las demás.

Principio 8. Las personas con discapacidad tienen derecho a presentar denuncias e iniciar procedimientos legales en relación con delitos contra los derechos humanos y violaciones de los mismos, a que se investiguen sus denuncias y a que se les proporcionen recursos efectivos.

Principio 9. Los mecanismos de vigilancia sólidos y eficaces tienen un papel fundamental de apoyo al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Principio 10. Deben proporcionarse programas de sensibilización y formación sobre los derechos de las personas con discapacidad, particularmente en relación con su acceso a la justicia, a todos los trabajadores del sistema de justicia.

Sin duda, estos principios **constituyen un instrumento valioso para brindar un impulso notable en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ya que expresan lineamientos y directrices que deben ser adoptadas en nuestra legislación, para garantizar igualdad de acceso a la justicia a todas las personas con discapacidad, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.**

CONSIDERANDO, que:

El **artículo 12 de dicho instrumento jurídico internacional**, sobre el igual reconocimiento ante la ley, y el **artículo 13**, sobre el acceso a la justicia, estipulan que los Estados deben, entre otras cosas:



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia

- (a) **Reconocer** que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida;
- (b) **Adoptar las medidas pertinentes** para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica;
- (c) Asegurar que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica **se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos**, y que éstas aseguren que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona;
- (d) **Asegurar el acceso efectivo a la justicia para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás**, incluso mediante **ajustes de procedimiento y adecuados a la edad**, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como **participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos**, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

En ese tenor, los artículos 12 y 13 de la Convención representan un cambio de paradigma en el reconocimiento jurídico de la autonomía de las personas con discapacidad, en razón de que rechazan las interpretaciones históricamente arraigadas de la discapacidad que privan a las personas con discapacidad de cualquier medio para ejercer su voluntad y sus preferencias, y que en muchos países han dado lugar a la denegación efectiva del acceso a la justicia y las garantías procedimentales a estas personas en igualdad de condiciones con las demás.

Además, coincidimos con la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, en el hecho de que derechos fundamentales, como **el derecho a guardar silencio y la presunción de inocencia**, pueden denegarse ya sea de forma directa, en la legislación o las políticas, o indirecta, en la costumbre y la práctica. Esto acarrea enormes riesgos de consecuencias negativas como confesiones falsas, veredictos erróneos o situaciones de privación ilícita de libertad.



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia

Y finalmente, tomando en cuenta que el **Protocolo IBEROAMERICANO de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas**, aduce que se debe partir del reconocimiento de todas las barreras que propician una desigualdad de las personas con discapacidad en el derecho de acceso a la justicia **para estar en posibilidad de implementar ajustes** que efectivamente, en la práctica, eliminen esas situaciones de desigualdad y discriminación, los cuales podrán ser tan variados como las necesidades del caso lo establezcan, pues en última instancia **las y los jueces tienen la obligación de instrumentarlos** atendiendo al caso en concreto, **sin pretender establecer criterios generales de aplicación**. Incluso, su labor de adoptar los ajustes al procedimiento debe ir más allá de lo señalado en los ordenamientos jurídicos aplicables, pues **deberán implementarlos aun en los casos en los que tales normas no prevean la existencia del ajuste** que se requiera.

Además, de que sería absurdo pretender la existencia de una lista exhaustiva de ajustes al procedimiento, pues se dejaría fuera a un número considerable de requerimientos particulares de personas con discapacidad.

Señala dicho Protocolo algunos ejemplos de ajustes al procedimiento, tales como:

- “Habilitación de acompañamiento durante la investigación o el testimonio de una persona de apoyo elegida por [la persona con discapacidad].
- Utilización de la comunicación alternativa y aumentativa, tales como imágenes y tablas de comunicación, para permitir a la persona expresarse plenamente.
- Investigaciones realizadas por quienes tienen experiencia y conocimiento en la comunicación con las personas con discapacidad, en lugar de una investigación sin esta capacitación.
- Expertos para eliminar del testimonio la información errónea, teniendo presente el tipo de discapacidad de quien declara.
- Apoyo en la comunicación con el testigo.
- Asistencia [...] para la formulación de preguntas de modo que sean comprendidas por el testigo, y en el caso de los niños, teniendo en cuenta su capacidad en evolución.
- La posibilidad de declarar sin formalidades de vestimenta oficial; poder declarar en lugares diferentes a las cámaras, despacho del Juez o sala de audiencia oficial, incluso mediante enlaces de video.
- Tiempo suficiente para dar



**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia**

testimonio y descansos adecuados durante el proceso. ▫ Provisión de información sobre los procedimientos en un lenguaje sencillo, entre otras”.

En consecuencia, someto a su consideración este proyecto de decreto mediante el cual se propone fortalecer las disposiciones legales del **Capítulo Noveno de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad**.

Concretamente propongo este conjunto de modificaciones legales, para asegurar que:

- El derecho de las personas con discapacidad al acceso a la justicia, se oriente con base en el **Modelo Social y de derechos humanos**, y en principios internacionales, como los de: *La mayor protección a la persona con discapacidad, sustentada en el principio pro persona; el de igualdad y no discriminación; el de igualdad entre la mujer y el hombre; el de accesibilidad; el de respeto por la diferencia, y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas; el de participación e inclusión plenas y efectivas en la comunidad, y el de protección de las y los niños con discapacidad.*

Cabe referir, que el **modelo social surgió en Inglaterra y en los Estados Unidos de América a finales de la década de los sesenta y principios de los años setenta**, con el denominado movimiento de vida independiente, promovido por las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad, a partir del cual se replantearon las causas que originaban la discapacidad, es decir, las barreras físicas y actitudinales de la sociedad en su conjunto (en lugar de las diversidades funcionales de las personas), que generaban, inaccesibilidad a los edificios, al transporte, a la infraestructura urbana y a los servicios, las conductas discriminatorias y la repetición de estereotipos en contra de las personas con discapacidad, entre otros elementos.

De este modo, las personas con discapacidad comenzaron a reivindicar el lugar que ocupan en la sociedad, combatiendo la percepción de ser ciudadanos de segunda clase, o bien, la de un grupo vulnerable al que resultaba necesario proteger, asistir, institucionalizar y medicar, asentando que eran ellas mismas,

y no terceras personas (ya fueran médicos, familiares o instituciones) las que mejor conocían sus necesidades, así como los medios para satisfacerlas. Fue así como se establecieron “algunos de los nuevos principios que les iban a guiar: independencia,²³ autosuficiencia, transversalidad –y sobre todo- el enfoque de la discapacidad como un problema social”.

En consecuencia, el modelo social sentó sus bases a partir de diversos presupuestos fundamentales:

- Que la discapacidad no tiene un origen en las limitaciones o diversidades funcionales de la persona, sino en las limitantes que la propia sociedad genera, debido a las barreras que impone a las personas con discapacidad para el desarrollo de sus vidas, ya sean culturales, actitudinales, físicas, entre otras. Por consiguiente, establece una disociación entre los conceptos de diversidades funcionales y discapacidad.
- Que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su diversidad física, mental, sensorial o intelectual; es decir, independientemente de sus diferencias, pues las mismas forman parte de la diversidad humana.
- Que las personas con discapacidad, como parte de la diversidad humana, deben ser incluidas en la comunidad reconociéndoles una participación plena y efectiva, toda vez que contribuyen a la misma, en igual medida que las personas sin discapacidad.
- Que las personas con discapacidad tienen plena autonomía e independencia en la toma de sus propias decisiones. Elemento primordial si se considera que el modelo social tuvo su origen en el movimiento de vida independiente.
- Que la discapacidad comienza a ser considerada como una cuestión de derechos humanos, y no como una enfermedad.

Por su parte, el Modelo de derechos humanos reconoce a las personas con discapacidad como titulares de derechos. Por ello, se promueve que las personas con discapacidad efectivamente los ejerzan en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin discriminación alguna, reiterando su dignidad, así como el respeto por la diferencia que implica la discapacidad, lo cual conlleva



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia

la ausencia de conductas orientadas a la reproducción de estereotipos y a la exclusión y desventaja social de las personas con discapacidad.

Además de que se promueve su inclusión y participación plena y efectiva en la sociedad, toda vez que sus necesidades y requerimientos son atendidos por la comunidad.

- Por último, este proyecto propone integrar a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, **a la Fiscalía General de la República**, considerando que dicho Consejo se encarga de coordinar las acciones orientadas a la aplicación de la Convención, y la Fiscalía a la persecución e investigación de los delitos.

El propósito final, es contribuir al ejercicio, respeto y disfrute del derecho de las personas con discapacidad, al acceso a la justicia, como presupuesto y garantía básica, para la salvaguarda de sus derechos fundamentales de accesibilidad, igualdad y no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, y derecho a igual reconocimiento ante la ley. En general, a mejorar los estándares de administración de justicia y consolidar el Estado de derecho.

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara Alta, el siguiente Proyecto de

**DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Artículo Único. Se reforman los artículos 28 y 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y se adiciona el artículo 28 Bis al mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Capítulo IX

Acceso a la Justicia

Artículo 28. *Las personas con discapacidad tienen derecho al acceso a la justicia, por lo que deberán recibir un trato digno, apropiado en igualdad de condiciones con los demás y sin discriminación en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, mediante los ajustes sustantivos, de procedimiento y adecuados a la edad, el género o el origen étnico, que sean necesarios, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en dichos procedimientos, bajo los términos que establezcan las leyes respectivas.*

Artículo 28 Bis. *Para garantizar su derecho al debido proceso y de audiencia, se les reconoce su personalidad y capacidad jurídicas, por lo que la tramitación de todo juicio en que sean parte, se orientará con base en la aplicación y cumplimiento de los principios y lineamientos generales siguientes:*

- I. En el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, y en el respeto irrestricto por su autonomía y libertad en la toma de decisiones.*
- II. La mayor protección a la persona con discapacidad, sustentada en el principio pro persona.*
- III. El de igualdad y no discriminación.*
- IV. El de igualdad entre la mujer y el hombre.*
- V. El de accesibilidad.*
- VI. El de respeto por la diferencia, y aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas.*
- VII. El de participación e inclusión plenas y efectivas en la comunidad,*
y
- VIII. El de protección de las y los niños con discapacidad.*

Artículo 44. *La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por once representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de*



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia

los Derechos Humanos, uno de la Fiscalía General de la República y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Salud;

*II. Secretaría de **Bienestar Social**;*

III. Secretaría de Educación Pública;

III Bis. Secretaría de Cultura; Fracción adicionada

IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y

IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El Director General del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD en materia del derecho
de acceso a la justicia**

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

SUSCRIBE

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los seis días del mes de diciembre de 2022.

Fuentes de Consulta:

-Protocolo IBEROAMERICANO de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Consulta en: http://migracion.iniciativa2025alc.org/download/19ALCc_Protocolo_Iberoamericano.pdf